



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 15 de mayo de 2019

Auto Interlocutorio No. 20

MAGISTRADO PONENTE: EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS

ACCIÓN:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
EXPEDIENTE:	76109-33-33-003-2015-00015-01
DEMANDANTE:	ABRAHAM RIASCOS CAICEDO
DEMANDADO:	DISTRITO DE BUENAVENTURA
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO – CONFIRMA

Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisión de la fecha. (Acta No. ____).

I. OBJETO DE LA DECISION

Se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante¹, contra el auto interlocutorio No. 098 proferido el 22 de marzo de 2019², por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Buenaventura, que rechazó de plano la solicitud de liquidación de las condenas establecidas en las sentencias del mencionado Juzgado y del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

II. ANTECEDENTES

2.1 Pretensiones

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA y actuando a través de apoderado judicial, el señor Abraham Riascos Caicedo presentó demanda contra el Distrito de Buenaventura, con la finalidad de que se declare la nulidad de los oficios de fecha 11 y 25 de julio de 2014, por los cuales la Secretaria de Tránsito y Transporte del Distrito de Buenaventura, le negó el reconocimiento del contrato realidad durante el tiempo que estuvo vinculado en la entidad.

A título de Restablecimiento del Derecho solicitó que se condene a la entidad demandada a que reconozca y pague a título de indemnización, todas las prestaciones sociales, las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral; sumas que requirió pagarse indexadas; al pago de las costas y perjuicios causados con ocasión de la demanda, y finalmente que se dé cumplimiento a la

¹ Ver folios 40 a 41 cdno 5
² Ver folio 32 cdno 5

sentencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 192 del CPACA.

2.2 Hechos

Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir los supuestos fácticos de la siguiente manera:

El demandante prestó sus servicios como agente de tránsito durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2011 al 02 de enero de 2014 en virtud de varios contratos de prestación de servicios suscritos con la entidad accionada, y posteriormente presentó demanda ante el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Buenaventura, para que declarara la existencia de la relación laboral entre las partes, le reconocieran y pagaran los efectos salariales y prestacionales que derivan de ella.

El a quo, mediante sentencia No. 001 del 16 de enero de 2017 declaró la nulidad de los oficios demandados y condenó a la entidad accionada a pagar al actor, el valor correspondiente a las prestaciones sociales que devengaba un empleado público de planta de la entidad territorial durante el tiempo de duración de los contratos probados, liquidados conforme al valor pactado en cada uno de los contratos de prestación de servicios suscritos por las partes; sumas que ordenó ser debidamente indexadas conforme a los índices de inflación certificados por el DANE aplicando la fórmula $R = Rh \frac{\text{índice final}}{\text{Índice inicial}}$

Finalmente condenó en costas a la entidad accionada y ordenó dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

La decisión anterior fue recurrida por la parte demandada, argumentando que la parte demandante no probó siquiera sumariamente la existencia de los elementos esenciales de la relación laboral, además que los contratos de prestación de servicios fueron suscritos por un tiempo determinado y al finalizar los términos establecidos en cada contrato no fueron terminados.

Que los contratos suscritos fueron desarrollados frente a las necesidades de la entidad, pues no contaba con personal de planta suficiente para desarrollar actividades relacionadas con la movilidad.

Que en la relación contractual no se configuró elemento de subordinación, debido a que las funciones de trabajo se limitaron al desarrollo del objeto del contrato.

Que los contratos se suscribieron en razón a la formación del demandante y se estipuló una duración específica para el cumplimiento, reiterando que se debían realizar con una persona natural debido a que las actividades no se podían desarrollar por el personal de planta de la entidad, el cual era insuficiente y requería de conocimientos especializados del tema.

Radicación	: 76109-33-33-003-2015-00015-01
Medio de control	: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
Demandante	: ABRAHAM RIASCOS CAICEDO
Demandado	: DISTRITO DE BUENAVENTURA
Asunto	: APELACIÓN DE AUTO



3

Finalmente señaló que la reclamación se encontraba prescrita conforme a lo dispuesto en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y el artículo 151 del código Procesal del Trabajo; recurso que fue resuelto por esta Corporación, mediante providencia No. 264 del 27 de septiembre de 2018, en el sentido de modificar el numeral TERCERO de la sentencia de primera instancia condenando a la demandada al reconocimiento y pago del valor correspondiente a las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral reconocida en dicha sentencia, por los periodos comprendidos entre el 01 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2012 y el 02 de mayo de 2013 al 02 de enero de 2014.

2.3 Incidente de liquidación de condena de sentencia

La apoderada judicial de la parte demandante mediante escrito presentado el 14 de marzo de 2019³ promovió ante el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Buenaventura dentro del término establecido en el artículo 193 del CPACA⁴, incidente de liquidación de la condena declarada en las sentencias de primera y de segunda instancia, con el fin de que se establezca de forma concreta el monto que debe cancelar el Distrito de Buenaventura, para constituirlo como una obligación exigible ante las autoridades administrativas y judiciales.

Para lo anterior, presentó la liquidación detallada de la condena en cuantía de \$85.000.000 millones de pesos, tomando como base los salarios pactados en los contratos de prestación de servicios suscritos con la entidad, suma que debe ajustarse al momento del pago, toda vez que deben liquidarse los intereses moratorios por el no pago oportuno y la inclusión de las costas del proceso.

2.4 Del auto apelado

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Buenaventura mediante auto de sustanciación No. 098 del 22 de marzo de 2019, rechazó de plano el incidente de liquidación de la sentencia, argumentando la improcedencia del mismo toda vez que la sentencia proferida en primera instancia, no fue proferida en abstracto, pues además de que es liquidable, no es exigible a la fecha de la presentación de la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 192 del CPACA.

Finaliza señalando que, debido a que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 27 de septiembre de 2018, no es exigible por no haber transcurrido

³ Ver folios 1 a 4 cdno 5

⁴ ARTÍCULO 193. CONDENAS EN ABSTRACTO. Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se harán en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en este Código y en el Código de Procedimiento Civil. Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o al de la fecha de la notificación del auto de obediencia al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

los diez (10) meses que exige la norma y por ello rechaza de plano el incidente presentado.

2.5 Fundamentos del recurso de apelación:

Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte demandante interpuso el recurso de apelación contra el auto No. 098 del 22 de marzo de 2019 que rechazó de plano el trámite incidental de liquidación de la sentencia, con fundamento en los siguientes argumentos:

"(...) En la sentencia, se condenó al municipio de Buenaventura, a pagar a favor del demandante, a título de indemnización, un monto equivalente a las prestaciones sociales, que corresponden a los servidores públicos de planta, de la entidad territorial, perteneciente al cargo de agente de tránsito y por el tiempo de duración de los contratos y demás acreencias que le adeudaban al demandante.

En el fallo no se dijo el monto concreto de dichas acreencias laborales, debido a que la suscrita presento cuenta de cobro al Municipio de Buenaventura (v) en el mes de diciembre de 2018, y esta no ha cumplido con lo dispuesto en el proveído, es necesario realizar la liquidación para un eventualmente cobrar los valores monetarios por vía ejecutiva.

Cabe señalar que al presentar el incidente, no quiere decir que se va a iniciar el proceso ejecutivo inmediatamente, toda vez que está aún no se ha hecho exigible.

Según el artículo 193 del código contencioso y de procedimiento administrativo, que trata sobre la forma de cobrar las condenas en abstracto, el interesado debe presentar por incidente la liquidación de la sentencia. Considero que está en abstracto debido que aunque señala que se deben pagar unas acreencias laborales, no establece el monto concreto de las mismas. (...)"

III. CONSIDERACIONES:

3.1. Competencia

De conformidad con lo previsto en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación presentado contra la providencia de primera instancia.

3.2. Problema Jurídico

El presente asunto consiste en establecer ¿si es procedente o no darle trámite a la solicitud de incidente de liquidación de la sentencia propuesta por la parte actora, respecto de las providencias del 16 de enero de 2017 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Buenaventura y del 27 de septiembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca?

Radicación : 76109-33-33-003-2015-00015-01
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
Demandante : ABRAHAM RIASCOS CAICEDO
Demandado : DISTRITO DE BUENAVENTURA
Asunto : APELACIÓN DE AUTO



Para tal efecto, se abordará el fundamento normativo del incidente de liquidación de condenas establecidas en la sentencia; para luego adoptar la decisión que corresponda.

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

Bajo el presupuesto de que los jueces deben proferir sus decisiones conforme a las reglas establecidas en las normas especiales y generales para definir el litigio, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, ha regulado el tramite incidental sobre las condenas de la siguiente manera:

La Ley 1437 de 2011 en el artículo 193 reprodujo lo dispuesto en el artículo 172 del CCA relacionado con las condenas en abstracto; y en el artículo 209, indicó que se tramitarán como incidente entre otros asuntos, la liquidación de condenas en abstracto, que se presentará de forma verbal o escrita durante las audiencias o una vez dictada la sentencia, según el caso, con base en todos los motivos existentes al tiempo de su iniciación, y no se admitirá luego incidente similar, a menos que se trate de hechos ocurridos con posterioridad, y cuando sean de aquellos que se promueven después de proferida la sentencia o de la providencia con la cual se termine el proceso, el juez lo resolverá previa la práctica de las pruebas que estime necesarias. En estos casos podrá citar a una audiencia especial para resolverlo, si lo considera procedente (artículo 210).

El Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012, contemplo en el artículo 283 la condena en concreto en los siguientes términos:

“Art. 283.- La condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, se hará en la sentencia por cantidad y valor determinados.

El juez de segunda instancia deberá extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado.

En los casos en que este código autoriza la condena en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, estimada bajo juramento, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la providencia respectiva o al de la fecha de la notificación del auto de obediencia al superior. Dicho incidente se resolverá mediante sentencia. Vencido el término señalado sin promoverse el incidente se extinguirá el derecho.

En todo proceso jurisdiccional la valoración de daños atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales.”.

Esta disposición, contempla dos clases de condena, en concreto y en abstracto, y establece que esta última debe liquidarse mediante trámite incidental dentro del término y bajo las condiciones contenidas en la norma citada; pero no ocurre así con las condenas en concreto.



El artículo 129 ibídem señaló las directrices de cómo deben proponerse y tramitarse los incidentes, y dice que quien promueva un incidente deberá expresar lo que pide, los hechos en que se funda y las pruebas que pretenda hacer valer. Las partes solo podrán promover incidentes en audiencia, salvo cuando se haya proferido sentencia. Del incidente promovido por una parte se correrá traslado a la otra para que se pronuncie y seguidamente se decretarán y practicarán las pruebas necesarias. En los casos en que el incidente puede promoverse fuera de audiencia, del escrito se correrá traslado por tres (3) días, vencidos los cuales el juez convocará a audiencia mediante auto en el que decretará las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio considere pertinentes.

La jurisprudencia del Consejo de Estado en diferentes pronunciamientos ha sido clara en determinar el asunto dependiendo el caso concreto, pues en aquellos casos en los que la condena ha sido en abstracto, considera procedente iniciar el trámite incidental para obtener la liquidación en una suma específica, liquida; pero que en aquellos casos en que en la sentencia no se determinó una cantidad específica tal circunstancia no le quita el carácter de condena en concreto, en tanto que el valor reclamado es cuantificable.

Así lo estableció la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante auto del 24 de mayo de 2017⁵, en el que se resolvió un caso similar de la siguiente manera:

*“Al respecto, el Despacho considera que no le asiste razón a la parte demandante, pues esta Corporación en la sentencia de segunda instancia profirió una condena en concreto, toda vez que además de ordenar al municipio de Medellín la devolución de un valor específico al contribuyente (\$824.332.377), **también estableció los parámetros sobre los cuales se deben liquidar los intereses corrientes y moratorios.***

Por tanto, si bien en la sentencia de segunda instancia no se determinó una cantidad específica respecto a los intereses, lo cierto es que tal circunstancia no le quita el carácter de condena en concreto, en tanto que el valor de los mismos es cuantificable al haberse indicado la tasa aplicable y el lapso en que deben ser calculados.” (Negrillas fuera de texto)

Para lo anterior, se tuvo en cuenta lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil en providencia del 26 de septiembre de 1990⁶:

“Las condenas se pronuncian in genere o se dictan en concreto. Las primeras obedecen al hecho de que en el proceso, aunque aparece acreditada la existencia del perjuicio o daño, no se halla probada la cuantía o monto de la indemnización correspondiente. En este tipo de condenas se da una insuficiencia probatoria sobre el último extremo, que deberá suplirse durante el trámite posterior.

Las condenas en concreto pueden asumir dos formas, igualmente válidas, así: a)- La sentencia fija un monto determinado por concepto de perjuicios; por ejemplo, condena a pagar \$ 1'000.000.00; y b)- La sentencia no fija suma

⁵ Radicado: 05001-23-31-000-2005-06730-02(22599) C.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

⁶ C.P. Jaime Paredes Tamayo, radicación No. 369.



determinada, pero la hace determinable, bien porque en la misma se dan en forma precisa o inequívoca los factores para esa determinación, de tal manera que su aplicación no requiere de un procedimiento judicial subsiguiente, con debate probatorio para el efecto; o bien, porque los elementos para esa determinación están fijados en la Ley [...]” (Negrilla fuera de texto)

En esta oportunidad, concluyó que es claro que la sentencia proferida contenía una condena en concreto, toda vez que los intereses corrientes y moratorios allí reconocidos son susceptibles de ser cuantificados al haberse señalado los lineamientos para su determinación.

3.4. Caso Concreto

Para efectos de resolver el problema jurídico planteado, se debe tener en cuenta que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Buenaventura, mediante auto No. 098 del 22 de marzo de 2019 rechazó de plano el incidente de liquidación de sentencia, al considerar que es improcedente, toda vez que la sentencia proferida en primera instancia, no fue proferida en abstracto, pues además de que es liquidable, no es exigible a la fecha de la presentación de la solicitud, igualmente señala que debido a que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 27 de septiembre de 2018, todavía no es exigible por no haber transcurrido los diez (10) meses que exige la norma.

La parte recurrente, argumenta que la condena fue en abstracto, porque en la condena realizada al municipio de Buenaventura, no se determinó de forma concreta el monto de las acreencias, esto es, el valor equivalente a las prestaciones sociales que corresponden a los servidores públicos de planta de la entidad, ni las demás acreencias que se le adeudaban al demandante.

Ahora bien, al examinar la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de los oficios demandados y condenó a la entidad accionada a pagar al actor el valor correspondiente a las prestaciones sociales⁷ que devengaba un empleado público de la planta de personal de la entidad, durante el período en que prestó sus servicios el demandante, liquidados conforme al valor pactado en cada uno de los contratos de prestación de servicios suscritos por las partes; sumas que ordenó ser debidamente indexadas conforme a los índices de inflación certificados por el DANE aplicando la fórmula $R = Rh \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}}$ explicada en la parte considerativa y en la resolutive.

Finalmente condenó en costas a la entidad accionada y ordenó dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA⁸.

⁷ Igualmente seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales y demás).
⁸ ARTÍCULO 192. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento. Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al desatar el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia, modificó la decisión adoptada en el sentido de ordenar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral reconocida, esto es, entre el 01 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2012 y del 02 de mayo de 2013 al 02 de enero de 2014; y la confirmó en todo lo demás.

De acuerdo con lo anterior, y a lo expuesto en la jurisprudencia del Consejo de Estado, encuentra la Sala, que las sentencias impusieron las condenas en concreto, pues a pesar de no haber fijado un monto determinado, se trata de aquellas en las que no se fija una suma determinada, pero es determinable, porque en la misma se estableció de forma precisa e inequívoca los factores para su determinación, de tal manera que su aplicación no requiere de un procedimiento judicial subsiguiente, que amerite un debate probatorio para el efecto, porque del acervo contenido en el proceso, se tienen los elementos necesarios para que la entidad demandada la liquide y cuantifique, teniendo en cuenta los parámetros contenidos en las sentencias mencionadas, como por ejemplo, la determinación de los efectos salariales a tener en cuenta, los salarios equivalentes a los de un agente de tránsito partiendo del valor pactado en los contratos de prestación de servicios, aplicando la fórmula de indexación explicada en la sentencia de primera instancia.

En el mismo sentido se pronunció la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el auto del 04 de agosto de 2005⁹, en el cual se analizó un asunto similar al que ahora se estudia, donde el recurrente apeló la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que rechazó de plano el incidente de liquidación de la condena impuesta en la sentencia, en la que se había ordenado a la entidad demandada a pagarle los dineros adeudados por concepto de sueldos y prestaciones dejadas de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta la fecha de reintegro, porque en su parecer la condena fue en abstracto.

la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.

Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este Código.

Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el Juez o Magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria. Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso.

Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud.

En asuntos de carácter laboral, cuando se condene al reintegro, si dentro del término de tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo disponga, este no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al interesado, en adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo.

El incumplimiento por parte de las autoridades de las disposiciones relacionadas con el reconocimiento y pago de créditos judicialmente reconocidos acarreará las sanciones penales, disciplinarias, fiscales y patrimoniales a que haya lugar.

Ejecutoriada la sentencia, para su cumplimiento, la Secretaría remitirá los oficios correspondientes.

⁹ dentro del proceso con radicación 0492-04, C.P. Alejandro Ordoñez Maldonado.



64

En aquella oportunidad, el actor pretendió que el tribunal a través de incidente de liquidación determinara la condena impuesta en una cifra numérica, petición que fue rechazada al considerar que no corresponde al juez fijar su valor, si no a la entidad accionada, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado; y por su parte, el alto tribunal en lo contencioso administrativo al desatar la alzada, confirmó la decisión del *a quo* bajo las mismas consideraciones, al encontrar que la condena al pago de los reconocimientos a que tiene derecho había sido en concreto¹⁰, pues aparte de reconocer los emolumentos a que tiene derecho el actor, se explicó la fórmula de la actualización que se debía aplicar, y finalmente concluyó, que *“[e]n materia laboral, la jurisdicción de lo contencioso administrativo actúa como juez declarativo del derecho y esa función se cumple cuando se examina la legalidad del acto administrativo y se ordena el restablecimiento del derecho correspondiendo a la entidad condenada ejecutar la decisión.”*

Así las cosas, la Sala no comparte la afirmación del recurrente de que la sentencia contempló una condena in-genere por el hecho de no haberse procedido a realizar la operación matemática que diera como resultado un valor numérico determinado, toda vez que la sentencia tanto en la parte considerativa como en la resolutive, estableció las prestaciones que el distrito de Buenaventura debe pagar al actor, y además precisó que ésta entidad al hacer la liquidación, debe tener en cuenta el valor que devengaba un agente de tránsito durante el período en que el demandante prestó sus servicios a la entidad, precisando los periodos, (desde el 01 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2012 y el 02 de mayo de 2013 al 02 de enero de 2014), y determinó que se hará la liquidación sobre el valor pactado en cada uno de los contratos, los cuales se encuentran detallados en la parte considerativa de la providencia¹¹ y por último explicó la fórmula que debe aplicar para efectos de la actualización de las sumas que llegaren a resultar.

Por lo anterior, la Sala confirmará el auto No. 098 del 22 de marzo de 2019 proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Buenaventura, mediante el cual se rechazó de plano el incidente de liquidación de las sentencias propuesto por la parte demandante.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

¹⁰ «El pago de los salarios y demás prestaciones que resulten a favor del actor se ajustará en su valor, de conformidad con el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, hasta la fecha de ejecutoria de la presente providencia, dando aplicación a la siguiente fórmula:

$$R = Rh \times \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}}$$

En donde el valor presente (R se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por el actor desde la fecha en que fue desvinculado del servicio, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia), por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago), fórmula que, por tratarse de pagos de tracto sucesivo, deberá aplicarse en forma separada para cada mesada salarial y para los demás emolumentos.»

¹¹ Ver folio 26 cdno 5

